

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por CLAUDIA PATRICIA MONSALVE SALDARRIAGA en contra de PROTECCIÓN S.A. y COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. (Radicado 05001-31-05-012-2016-00960-01).

ANTECEDENTES

Pretende la demandante se condene al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes con ocasión a la muerte de su compañero permanente Albeiro de Jesús Lopera Hoyos a partir del 17 de febrero de 2015, con el correlativo pago de los intereses de mora que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y las costas procesales.

Al efecto, narró que Albeiro de Jesús Lopera Hoyos falleció el 17 de febrero de 2015 a quien en vida le había sido reconocida una pensión de invalidez de parte de Protección S.A. Convivió con el causante en calidad de compañeros permanentes por más de 5 años, concretamente del año 2000 al 2015 cuando muere, fecha hasta la cual fue su beneficiaria en salud. Intentó radicar en tres oportunidades solicitud de pensión de sobrevivientes ante Protección S.A, siendo negada la recepción, por corresponder tal trámite a Seguros Bolívar, petición que finalmente fue radicada el 10 de junio de 2016, recibiendo

respuesta negativa el 14 de junio del mismo año en tanto el haber sido modificada la modalidad de la pensión de invalidez a renta vitalicia, era Seguros Bolívar quien debía pronunciarse. Procedió a elevar solicitud a esta Compañía de Seguros, prestación que fue negada por medio de la Resolución DNP 3193 del 30 de octubre de 2015 por encontrar una separación de ocho meses en el año 2012. Interpuso los recursos de ley, pero nunca fueron decididos.

La COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A dio respuesta al libelo aceptando el hecho de la muerte, la pensión de invalidez reconocida, la negativa dada a la pensión de sobrevivientes pedida, la modalidad de renta vitalicia contratada desde el 26 de mayo de 2014. Niega la existencia de una convivencia continua por el término de 5 años anteriores a la muerte, y afirma no constarle los hechos en los que intervino de forma directa Protección S.A como Fondo de Pensiones. Como medios exceptivos de mérito formuló los de inexistencia de la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, inexistencia de la obligación, prescripción y buena fe

Por su parte, PROTECCIÓN S.A se pronunció admitiendo el reconocimiento de su parte de la pensión de Invalidez al señor Albeiro de Jesús Lopera, la solicitud elevada por la demandante de la pensión de sobrevivientes. Niega que se haya emitido negativa de la prestación, pues se remitió a la aseguradora competente para resolver en virtud de la modalidad de renta vitalicia contratada por el pensionado. Afirma no constarle los hechos restantes. Propuso como excepciones de fondo las que denominó: Existencia de un contrato de renta vitalicia irrevocable, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por pasiva, cumplimiento de todas las obligaciones de Protección S.A respecto al caso en concreto, pago y compensación, falta de causa para demandar, buena fe y prescripción.

Esta demandada, promovió el llamamiento en garantía de la Compañía de Seguros Bolívar S.A, señalando que para la vigencia en que se estructuró la invalidez de Albeiro de Jesús Lopera, la póliza previsional fue tomada con Seguros Bolívar S.A, por lo que es quien tendría la obligación contractual de responder por el pago de la suma adicional que permita financiar la pensión de

sobrevivientes que se discute, a más que el pensionado optó por la modalidad de pensión de renta vitalicia con esta aseguradora para lo cual se trasladó todo el capital existente para que se continuara pagando la mesada pensional.

Este llamamiento fue admitido por el Juzgado mediante auto del 17 de abril de 2017 (fl.302) en cuya respuesta, la compañía aceptó la contratación de la póliza para amparar la suma adicional y la suscripción de una póliza por renta vitalicia con el causante. Propuso como medios de defensa los de: pago de la suma asegurada por la póliza colectiva previsional, inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de sobrevivientes en virtud de la póliza de renta vitalicia, límite a la cobertura y valor asegurado, sostenibilidad financiera del Sistema, imposibilidad de condena a la aseguradora frente al retroactivo, los intereses de mora, costas y agencias en derecho en caso de una improbable condena, prescripción y compensación.

Surtido el trámite de rigor, el 27 de octubre de 2020 el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia en la que DECLARÓ que la demandante es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional. CONDENÓ a la COMPAÑÍA SEGUROS BOLÍVAR S.A a pagar la prestación a partir del 17 de febrero de 2015, cuyo retroactivo calculado entre el 17 de febrero de 2015 y el 31 de octubre de 2020 asciende a \$55.641.466 sobre el que AUTORIZÓ los descuentos por aportes en salud. ORDENÓ continuar pagando una mesada pensional equivalente a \$877.803 sin perjuicio de los incrementos anuales y la mesada adicional de diciembre. CONDENÓ a la COMPAÑÍA SEGUROS BOLÍVAR a pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 20 de marzo de 2016 y hasta que se haga efectivo el pago. ABSOLVIÓ a Protección S.A. de todas las pretensiones de la demandada, y a la Compañía Seguros Bolívar de las peticiones formuladas en el llamamiento en garantía. Impuso costas a la Compañía Seguros Bolívar, fijando las agencias en derecho en un 5% de lo ordenado, y a la demandante y en favor de Protección S.A en la suma de \$877.803.

La convocada que fue condenada aspira que la providencia sea revocada en su integridad, pues considera que en el asunto no se demostró con certeza la

existencia de una unión marital de hecho entre el causante y la demandante por un término continuo de más de 5 años anteriores a la muerte, pues la testimonial corrobora lo encontrado en la investigación administrativa respecto de la separación presentada en la pareja por el término de ocho meses en el año 2012, tiempo de ruptura en el que no quedó acreditado el acompañamiento y apoyo mutuo, encontrando disparidad en los dichos de la accionante y la madre del fallecido. Advierte que en el caso hipotético de ser confirmado el otorgamiento pensional, se exonere de los intereses de mora, debido a que la Compañía cumplió a cabalidad el precepto normativo, actuando bajo los postulados de la buena fe en coherencia con la norma aplicable.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Para decidir sobre la alzada interpuesta, se tiene que no es tema de discusión al interior del plenario que Albeiro de Jesús Lopera Hoyos, fue pensionado por invalidez de parte de Protección S.A a partir de enero de 2014 en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente (fl. 350), recibiendo esta Administradora para el mes de diciembre de 2013 de la Compañía Seguros Bolívar la suma adicional para la financiación (fl. 349), cuyo reconocimiento de la mesada pensional se dio hasta abril de 2014, ya que a partir de mayo de ese año el pensionado optó por la modalidad de pensión de renta vitalicia, la que contrató con Seguros Bolívar S.A (fl. 31 y 252-255), lo que generó el traslado del capital de la cuenta de ahorro individual a la mencionada aseguradora fls. 346-347). Albeiro de Jesús Lopera falleció por causas de origen común el 17 de febrero de 2015 (fl. 7).

De cara a lo anterior, y atendiendo el asunto en el marco del recurso a decidir, el problema jurídico a resolver por la Sala será determinar si CLAUDIA PATRICIA MONSALVE SALDARRIAGA acredita en debida forma el requisito de convivencia, necesario para ser beneficiaria en su calidad de compañera permanente de la pensión de sobrevivientes con causa del deceso de Albeiro

de Jesús Lopera Hoyos ocurrido el 17 de febrero de 2015. Definida esa situación jurídica, se analizará la procedencia de imponer el pago de intereses moratorios a cargo de la Compañía Seguros Bolívar S.A.

Pues bien, para resolver se tiene que la normatividad aplicable es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada - Teoría del hecho causante- por lo que dada la data en que ocurrió el óbito, debe aplicarse lo que dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, que señala los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, indicando textualmente lo siguiente de cara al tema:

“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con éste. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Así, para quien pretenda ser beneficiaria (o) de una pensión de sobrevivientes debe demostrar de manera cierta y convincente la convivencia por un espacio de 5 años con el causante, independientemente de sea un afiliado o un pensionado, en concordancia con lo definido por la SU 149 de 2021, que se opuso a la postura jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- que determinó como verdadero alcance del literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003 a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, in dubio pro operario, que el tiempo de convivencia mínima de cinco (5) años, solo es exigible en caso de muerte del pensionado (Ver SL1730-2020 reiterada en SL3843-2020, SL3785-2020, SL4606-2020, SL489-2021, SL362-2021,

SL1905-2021, SL2222-2021 y SL5270-2021); con el argumento de violar tal decisión directamente los principios de igualdad y sostenibilidad financiera del sistema pensional sin justificación objetiva, y no armonizar con los propósitos de la pensión de sobrevivientes ni con los del requisito de convivencia.

En tal contexto, debe brotar del acervo probatorio que existió con el fallecido Lopera Hoyos una convivencia ininterrumpida de por lo menos 5 años anteriores a su muerte, entendida esta como la *“comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado”* (Ver SL3813-2020 y SL5540-2021 que traen a colación la SL1399-2018).

Para ese fin, el polo activo de la Litis arribó como prueba documental una declaración extra juicio rendida por Albeiro de Jesús Lopera el 29 de agosto de 2013 ante la Notaría 31 del Círculo de Medellín (fl.10-12 y 128), en la que dejó sentada la unión marital de hecho existente con la demandante desde diez atrás de forma permanente. Asimismo, se arribaron unas declaraciones extrajuicio de terceros (fls.11-12) donde manifiestan sobre la convivencia existente en ese mismo lapso, y una certificación de la EPS Sura (fls.43-44) donde consta que para la defunción fungía como beneficiaria del finado en calidad de compañera permanente la señora Claudia Patricia Monsalve Saldarriaga.

Para el mismo fin, la demandante también trajo la testimonial de RUTH DEL SOCORRO HOYOS DE LOPERA y ALBA LUCÍA MIRA Y GÓMEZ, madre del causante y amiga de la familia de la demandante respectivamente, quienes coincidieron en advertir que la pareja se conoció desde el año 2000, vínculo que se perfeccionó desde el año 2003 cuando se fueron a vivir juntos en el barrio La América, convivencia que perduró hasta el momento de la muerte ocurrida en febrero de 2015, siendo Claudia Patricia conocida en el vecindario como la esposa de Albeiro Lopera por todo ese tiempo, con quien compartía en eventos sociales y familiares bajo esa calidad. Advirtieron no conocer pareja

distinta en la vida del fallecido, quien al padecer de una enfermedad hepática desde muy joven recibió siempre los cuidados de su compañera, pues los períodos de hospitalización eran frecuentes y por tiempos prolongados. Agregó la señora Hoyos de Lopera que en el año 2012 se dio una separación entre su hijo y la demandante por un lapso de 8 meses por razones de infidelidad de Albeiro y porque él “*estaba tomando mucho trago*”, pero que ella nunca se fue de la casa donde vivían y que él, su hijo, aunque se fue a vivir con ella y luego estuvo solo en un apartamento siguió viendo por ella pues era quien asumía la carga económica debido a que Claudia no laboraba. Alba Lucía afirmó desconocer eventos de separación dados entre la pareja afirmando que siempre a su juicio y hasta la muerte fueron esposos, últimos días de vida en los que era Claudia la cuidadora según pudo constatar de las visitas que llegó a realizar en el hospital.

Estos medios probatorios señalados, tienden a demostrar que entre el causante y la demandante existió una convivencia real y efectiva en calidad de compañeros permanentes entre el año 2003 y el año 2012, reanudada luego de una separación de 8 meses presentada en esta calenda, hasta que se presentó el fallecimiento, lo que en estricta aplicación de la disposición normativa que contiene las exigencias de la prestación que se persigue, se da razón a la aseguradora demandada en cuanto a que la demandante no acredita que se haya presentado una convivencia de forma continua e ininterrumpida en los 5 años anteriores a la muerte.

No obstante ello, dadas las particularidades del caso, no del todo puede afirmarse, categóricamente, que ese lapso debe ser ininterrumpido, porque habrá casos en que las circunstancias impongan la intermisión, que no hacen perder la intención de convivir, y por ello no implica, entonces, *per se*, la pérdida del derecho.

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en nuestra especialidad, ha sostenido que una separación temporal de una pareja, ocasionada por diferentes motivos como pueden ser, laborales, económicos, de salud, o incluso generada por desavenencias de la misma pareja, no tiene la magnitud para dar al traste con un proyecto de vida y de familia que ha

construido una pareja por años, menos aún, si, como en el presente caso, dicha separación fue temporal y pasajera, y luego de superado el impase, se restableció la convivencia, evidenciándose con ello un claro ánimo de convivencia bajo condiciones de permanencia en la relación de pareja y de familia.

Y es que no es posible bajo el análisis de un derecho de la seguridad social, limitarse el juzgador a aplicar de manera restringida la norma que contempla el derecho prestacional que se reclama, sin miras de las circunstancias que rodean el devenir de una relación de pareja (SL1130-2022), encontrándose en esta oportunidad, dos personas que durante 9 años estuvo conformando una familia de la que no se procrearon hijos por entornos patológicos del fallecido, quien desde su adolescencia padeció una enfermedad hepática con habituales episodios de crisis y hospitalizaciones donde eran su compañera y madre quienes se encargaban de su cuidado. Para el año 2012, la pareja decidió separarse por razones de alcohol e infidelidad que no implicó la iniciación de una nueva relación, en la que Albeiro siguió a cargo de las necesidades económicas de la actora por encontrarse desempleada, pero el crítico estado de salud de Albeiro dio lugar a reanudar 8 meses después la vida en común que venía desarrollándose con Claudia Patricia, quien continuó con el acompañamiento y cuidado hasta el momento en que ocurrió el deceso.

De modo que, no hay duda que hubo una separación, pero ese disgusto que existió entre los compañeros a juicio de esta Sala de Decisión no tuvo la virtualidad de quebrantar la familia, manteniendo el vínculo la vocación de permanencia, por encima de la coyuntura que apenas fue pasajera (Ver SL3202-2015).

Recordemos que lo que busca esta modalidad pensional, es que la persona que acompañó a su esposo o compañero en su vida productiva siendo solidario con sus necesidades, no se vea afectado por la muerte de aquél al menos en lo que refiere a su sustento económico, por lo que se constituye en un dislate que frente a una relación comprometida donde los lazos afectivos nunca desaparecieron, estando de la mano la solidaridad, la ayuda mutua y el acompañamiento espiritual, una ruptura por 8 meses que resultan irrelevantes frente a los 15 años que la pareja Lopera Monsalve permaneció unida, tenga

la entidad de derruir el derecho pensional, en tanto claramente los compañeros enfrentaron un conflicto, pero se trató de una separación que no puede calificarse en ningún momento de definitiva, sino temporal, cuya reanudación de la convivencia, no deriva la intención de dar fin de manera irreversible al vínculo o destruir la consolidación del grupo familiar, siendo justo y admisible entender que se trató de una situación coyuntural, que no permite darle los efectos buscados por la pasiva responsable de la prestación.

A más de lo anterior, nótese como la documental de folios 10 a 12 y 128 del expediente da cuenta que el causante manifestó ante notario el 29 de agosto de 2013 luego de ocurrida la mentada separación, la convivencia surgida con la demandante desde 10 años atrás, declaración que a más de provenir del causante generador de la prestación, revela que esa interrupción dada en el año 2012 no significó un rompimiento de la relación, ni su superación el inicio de una nueva pues bien afirmó Ruth del Socorro Hoyos - madre- que Claudia Patricia fue el amor de su hijo hasta que murió; sino que implicó a los ojos de la pareja y su familia, la continuidad del proyecto de vida que surgió desde el año 2003.

Tampoco es posible desconocer aunado a lo anterior que la demandante permaneció vinculada al Sistema de Salud como beneficiaria del causante por su calidad de compañera permanente, y aunque ello por sí mismo ni las declaraciones extrajuicio arribadas que se constituyen en una narración de formato, dan cuenta de la convivencia que es imperativo probar, si ratifican y corroboran que ante la sociedad tal separación no afectó el ánimo de permanecer, lo que en efecto ocurrió hasta cuando se presentó el deceso.

Bajo tales reflexiones, es patente bajo la perspectiva analizada, que la demandante acreditó en este trámite judicial los requisitos que le eran propios para hacerse beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión a la muerte de su compañero permanente Albeiro de Jesús Lopera Hoyos, lo que conlleva a que tal disposición de instancia sea confirmada en los términos concedidos por no haber sido objeto de oposición de parte del apelante.

En lo que atañe a los intereses moratorios, debe partirse del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales o el no pago de mesadas dentro del plazo previsto en la ley para el otorgamiento de la pensión, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

Para determinar la procedencia de dicho gravamen, dada su naturaleza resarcitoria, debe analizarse la conducta de la entidad convocada en el retardo o negación del reconocimiento o pago de la pensión, ya que, en el evento de demostrarse que su proceder tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación, su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin el alcance que puedan darle los jueces, sin intervención de situación que le son imposibles de predecir, o cuando el reconocimiento de la pensión obedece a la creación de criterio jurisprudencial, debe exonerársele de los intereses de mora (SL704 de 2013, SL7893-2015 y SL2786 de 2020).

Bajo las anteriores previsiones, se tiene que la Compañía Seguros Bolívar S.A contrario a lo que definió el *A quo* no tiene a su cargo los intereses moratorios pretendidos, por cuanto es patente que la pensión de sobrevivientes que se concede al polo activo de esta acción proviene de un análisis amplio que le corresponde realizar a los Jueces conforme a los escenarios expuestos en el plano judicial, habiendo sido definido el derecho por parte de la aseguradora con sujeción estricta de la ley, que de manera alguna puede considerarse arbitraria ni negligente, lo que impide bajo esta óptica que deba asumir la condena de los intereses moratorios, razón por la que esta imposición debe ser revocada.

No obstante, habrá de ordenarse la indexación de la condena, que no es una condena en sí misma considerada, sino que con ella se surte la corrección monetaria a fin de solucionar el detrimento económico cuando no se pagan oportunamente las prestaciones del Sistema sin miramientos de la buena o mala fe de las partes. Indexación que deberá ser calculada hasta el momento del pago efectivo de la obligación que aquí se impone frente a cada mesada.

Conforme a todo lo expuesto, se procederá a revocar parcialmente la sentencia de primera instancia venida en apelación en cuanto a los intereses moratorios que se habían ordenado, y se confirmará en lo demás.

En esta instancia no se causaron costas por la forma en que se resolvió el recurso con prosperidad parcial del mismo.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA PARCIALMENTE** la sentencia venida en apelación de fecha y procedencia conocidas, en el entendido de ABSOLVER a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A de reconocer y pagar intereses de mora, para en su lugar ORDENAR el reconocimiento de la indexación. **CONFIRMA** en los demás. Sin costas.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados



CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
SIN FIRMA POR AUSENCIA JUSTIFICADA



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310501220160096001
Proceso: Ordinario
Demandante: CLAUDIA PATRICIA MONSALVE SALDARRIAGA
Demandado: COLPENSIONES Y OTROS
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 04/08/2022
Decisión: CONFIRMA Y REVOCA PARCIALMENTE

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 5/08/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

Secretario